



Al responder cite este número
MJD-OFI22-0017760-GED-1500

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2022

Honorable Magistrado
FERNANDO LEON BOLAÑOS PALACIOS
MAGISTRADO PONENTE
Corte Suprema de Justicia



secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.
co

Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

Contraseña:8ftvRKQLw

Acción de Tutela radicado: 05000-31200-01-2016-00008

Accionantes: Luz Miriam Castaño Quintero

Accionados: Sociedad de activos especiales SAE-SAS

Vinculados: Ministerio de Justicia y del Derecho

Jorge Luis Lubo Sprockel, identificado con la cédula de ciudadanía No. 84.089.658, en mi condición de Director Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, en ejercicio de las facultades que me confiere la Resolución No. 0376 de 2012 y conforme al acto administrativo No. 0063 del 18 de enero de 2021 (nombramiento) y acta de posesión 0007 de la misma fecha (adjuntos), procedo a contestar la tutela de la referencia, radicada en esta Cartera Ministerial con el No. MJD-OFI22-0017760-GED-1500 del 19 de mayo de 2022 dentro de la oportunidad legal, en los siguientes términos.

1.HECHOS

Atendiendo la protección especial que consagra el derecho de amparo conocido en Colombia como acción de tutela, la ciudadana **LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO** en nombre propio, acude ante la justicia como última instancia, buscando la protección constitucional para salvar sus bienes, en un esfuerzo jurídico solicitan en sus pretensiones: ***“Se garantice en debida forma los derechos fundamentales a la VIVIENDADIGNA (art. 51 C.P.), EL DEBIDO PROCESO (art.29 C.P.), A LA IGUALDAD (ART. 43 C.P.), la protección de los menores de edad – niñez- (art.44 C.P.) que están por encima de todos los nuestros por orden constitucional; El MINIMO VITAL EN RAZON DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA (art. 42 C.P.) Y LA PROPIEDAD, ARTICULO 58 C.P. (POSESIÓN QUE TIENE ENTIDAD AUTÓNOMA DE TALES CARACTERÍSTICAS Y RELEVANCIA QUE ELLA ES HOY CONSIDERADA UN DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DE CARÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL)”***. La señora **LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO** hizo una relación fáctica y un recuento histórico que citamos textualmente de la siguiente manera:

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



“ 1.1. Soy madre cabeza de familia, de quien depende mi hijo en condición de discapacidad y desde hace aproximadamente quince (15) años habitó con mis tres hijos en mi vivienda en Marinilla, Antioquia. Cabe resaltar que soy una persona intachable y no tengo ningún tipo de antecedente judicial y nunca he sido sometida a ninguna investigación penal. Tampoco he contribuido de manera alguna a que en mi hogar se cometan actividades ilícitas.

1.2 El 12 de mayo de 2001 en el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819 (ubicado en la Calle 21 No. 46A-89 del municipio de Marinilla, Antioquia y de propiedad de Luz Miriam Castaño Quintero) se halló 421 gramos de marihuana, los cuales habían sido comprados por uno de mis hijos, Elder Julián Toro Castaño, para el consumo personal.

1.3 Por conservar la sustancia prohibida sin tener la autorización de la autoridad competente, Elder Julian Toro Castaño fue declarado responsable penalmente y obligado a pagar multa por medio de la sentencia anticipada del 19 de septiembre de 2011 .

1.4 Por estos hechos, el 31 de octubre de 2021, la Fiscalía General de la Nación decidió de manera oficiosa iniciar el trámite de extinción del derecho de dominio de mi casa, así como su embargo y secuestro.

1.5 En consecuencia de la acción de extinción de dominio, mediante sentencia del 24 de julio de 2014 el Juzgado Primero Penal del Circuito especializado de Extinción de Dominio de Antioquia resolvió no declarar la extinción del derecho de dominio sobre mi hogar.

Particularmente, la sentencia relacionada señaló que las razones utilizadas por las Fiscalía para sustentar la extinción de dominio desconocen la protección de trato diferencial a una mujer cabeza de hogar. Esto en razón a que: “Por lo cual es claro que la Fiscalía no halló otro argumento diferente para atribuir negligencia y descuido a la afectada que el hecho de ausentarse durante la jornada diurna, encontrándola como responsable de faltar a la función social y ecológica que le es inherente para con su propiedad, y así mismo, con respecto al cuidado de sus hijos” Además, la sentencia relacionada establece que: “De la prueba recaudada se puede concluir que si la señora Luz Miriam Castaño Quintero, ha de ausentarse del bien es precisamente en cumplimiento de su jornada laboral para así cumplir sus obligaciones que como tal su condición de madre cabeza de hogar le impone para con sus hijos garantizando su bienestar y condiciones de vida digna; por tanto, tampoco puede llegarse al extremo de considerar por un lado altruista su actuar como madre y de otro lado negligente respecto

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



del cuidado del bien, cuando una y otra situación están íntimamente relacionados y no pueden ser valoradas aisladamente.”

1.6 No obstante, en ejercicio de facultad oficiosa de consulta, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá por medio de la sentencia con acta de aprobación del 4 de julio de 2019 decidió revocar la sentencia del 24 de julio de 2014 del Juzgado Primero Penal del Circuito especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, por lo cual se había resuelto no declarar la extinción de dominio de mi casa.

1.7 Para tomar la decisión de revocar la sentencia relacionada, la Sala de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá examinó mi supuesta conducta y estableció que fui negligente e incumplí mis obligaciones como propietaria y madre, la primera al no ejercer una vigilancia de mi heredad y como madre al “descuidar” a mis hijos por tener que trabajar jornadas muy extensas: “(...) en la medida que la necesidad de cumplir una extensa laboral no le imposibilitaba vigilar qué hacían sus hijos en especial Elder Julián, por los menos en los momentos en que compartía con ellos, bien cuando regresaba a su residencia luego del trabajo o los días martes o miércoles que descansaba.”

1.8 El Tribunal argumentó que no cumplía con las condiciones para ser considerada como madre cabeza de familia, desconociendo que yo sola tenía el deber de proveer con los recursos necesarios para la sostenibilidad de mis hijos, teniendo que cumplir con extensas jornadas laborales y a la vez velar por su cuidado, y a su vez, basado en un estereotipo redujo el rol de crianza, protección, educación y afecto del padre a la simple comunicación sobre mis hijos, sin prueba suficiente lo asumió como una crianza responsable, desconociendo que la misma debe ser compartida y en términos de igualdad entre padre y madre: “Es claro entonces que la disolución del hogar, no trajo como consecuencia la ruptura de las relaciones personales entre LUZ MIRIAM y su ex cónyuge, por el contrario (...) se concluye que ambos mantenían comunicación respecto de las situaciones referentes a sus descendientes en común, lo que desdibuja la figura de cabeza de hogar pues, como se dijo, no existe esa exigida en la legislación que regula la materia”

1.9 Con lo anterior, se ilustra que el operador jurídico sustentó su decisión con argumentos basados en prejuicios y estereotipos de género, acentuó los patrones socioculturales sobre el deber ser de la mujer y sus roles tradicionales, reforzó con sus conclusiones las discriminaciones históricas y condiciones especiales de vulnerabilidad y desigualdad de las mujeres como yo, determinando que mi función social como mujer es ser madre y cuidadora.

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



1.10 Además, al imponer cargas desproporcionadas sobre mis hijos y el manejo de mi bien inmueble se evidencia que el Estado no garantizó una atención diferencial, de acuerdo con mis necesidades como sujeto de especial protección al cuidado de un niño con capacidades diversas, que requería suministro de servicios sociales para apoyar las labores de cuidado, y que al mismo tiempo, yo como mujer pudiera integrarme con más facilidad tanto a la vida laboral como a la vida familiar .

1.11. En razón a este hecho arbitrario estoy siendo obligada, junto con mi familia, a desalojar de manera forzada mi casa, el único lugar con el que contamos para vivir.

1.12. Luego de un desgastante proceso orientado a evitar que nos desplacen de nuestro hogar, la Sociedad de Activos Especiales le entregado a mi hijo en condición de discapacidad una carta identifica con la referencia “Solicitud de Entrega Voluntaria” en la que se pide entregar mi casa el día 20 de marzo, so pena de iniciarse un proceso de desalojo forzado o denuncia penal.

1.13. Teniendo en cuenta la condición de discapacidad de mi hijo y con el interés de obtener alguna certeza y previsibilidad sobre la fecha del desalojo, el día 28 de marzo de 2022 radique un derecho de petición dirigido a la Sociedad de Activos Especiales, solicitando los siguiente:

1. Teniendo en cuenta que el desalojo puede vulnerar la dignidad humana de una persona con especial protección del Estado, solicito a SAE -SAS se abstenga de realizar cualquier procedimiento o diligencia, hasta tanto se garanticen los derechos de mi hijo con discapacidad en la forma establecida en la Ley y la Constitución.

2. También solicito a SAE-SAS me informe si en el proceso de entrega y desalojo ha considerado la situación de mi hijo con discapacidad y si está al tanto de la evidente injusticia que se quiere cometer contra mi familia, injusticia que puede evidenciarse con la simple lectura de la sentencia de extinción de dominio.

3. Solicito a SAE-SAS me informe cuales son las etapas y procedimientos que va adelantar para lograr el desalojo forzado de mi casa y cuando serán adelantados estos procedimientos.

4. Solicito a SAE-SAS me informe que derechos tengo frente a al entrega y desalojo de mi casa

1.14. El día 5 de mayo de 2022, la Sociedad de Activos Especiales dio respuesta al derecho de petición señalando que el desalojo se realizará el día 10 de mayo de 2022, es

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



decir apenas 5 días antes del desalojo forzado. Al respecto de la respuesta dada cabe resaltar que nos tomó por sorpresa y no tenemos adonde ir, ni tenemos redes de apoyo.

1.15. Sumado a lo anterior, atravesemos por una situación económica crítica, con mínimos ingresos económicos, situación que se ha agravado con la declaración de la emergencia sanitaria por el virus Covid-19 desde el año 2020 y que debe despertar su responsabilidad social.”

Así mismo y como quiera que el Ministerio de Justicia y del Derecho, actúa en los trámites de extinción en representación del interés jurídico de la Nación y en representación del ente responsable de la administración de los bienes afectados en el curso de esos procedimientos de extinción de dominio, no es el competente para interponerse en la materialización de una decisión judicial tomada con fundamentos legales y acorde con los hechos que indican sin lugar a dudas que el predio en discusión tenía que ser extinguido por el descuido y la falta de atención de su titular quien permitió y dejó hacer al interior del mismo comportamientos delictivos, relacionados con el tráfico de estupefacientes

Si bien es cierto la acción de amparo, protección o de tutela de derechos fundamentales como se conoce en Colombia, no exige una técnica depurada en su forma y presentación, por tratarse de una acción que contempla en su naturaleza una amplia posibilidad de acceso a toda la población en general; no exige, por tanto, calidades jurídicas al presentarlas, pero si como en el presente caso debe haber un nexo entre lo factico y es aspecto normativo citado.

Lo anterior no significa, que la acción de tutela se pueda radicar de cualquier manera. Precisamente, e la señora **Iuz Miriam castaño quintero** en su condición de afectada presentó un escrito donde mínimamente cumple con esa carga argumentativa, entendiendo que la naturaleza de la acción busca la protección especial, pero residual.

La extensión o complejidad de un escrito no conlleva per sé desarrollo argumentativo, pero necesariamente si se eleva una solicitud de índole constitucional invocando afectación de fondo nada menos que del derecho fundamental al debido proceso que abarca entre otros derechos el derecho de petición a la información y del manejo adecuado en la valoración probatoria, entre otros derechos, o como en el presente caso derechos fundamentales que tiene que ver con la vida misma y la preservación de las condiciones mínimas de un menor afectado, exigen por tanto el desarrollo de forma hilvanada donde los derechos afectados emerjan claramente y logren tener correspondencia con esta protección especial.

RAZONES DE LA DEFENSA.

Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho en los trámites de Extinción de dominio.

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



De conformidad con las disposiciones de la Ley 1708 de 2014 modificada por la Ley 1849 de 2017, le corresponde a esta Cartera actuar en el trámite de extinción de dominio, en condición de interviniente, en los términos del artículo 32 de esa normatividad, para defender el interés jurídico de la Nación y en representación del ente responsable de la administración de los bienes afectados en el curso del procedimiento. Asimismo, el Decreto 1427 de 2017, establece, entre los cometidos de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia, la función de intervenir en los trámites de extinción de dominio.

La intervención que ejerce esta Cartera en dichos procesos no implica facultad decisoria ni injerencia alguna en las decisiones por parte de los funcionarios judiciales competentes, como en este caso, la intervención de un Juez buscando acelerar un trámite de devolución de un bien.

Lo anterior, en consideración a lo indicado en precedencia, actuamos en los trámites extintivos como intervinientes, en defensa del interés jurídico de la Nación y en representación del ente responsable de la administración de los bienes afectados en el curso del procedimiento.

Ahora bien, respecto del caso que nos ocupa el artículo 113 de la Constitución Política establece el principio de la división de poderes, indicando que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente entre sí para cumplir con los fines estatales.

La Corte Constitucional en relación a la colaboración armónica de los organismos del Estado y su independencia al cumplir sus funciones, ha expresado:

“La separación de poderes es también un mecanismo esencial para evitar la arbitrariedad, mantener el ejercicio de la autoridad dentro de los límites permitidos por la Carta y asegurar así la libertad y seguridad de los asociados.

La lógica de este dispositivo, no por conocida deja de ser esencial: la división de la función pública entre diferentes ramas permite que el poder no descansa únicamente en las manos de una sola persona o entidad, a fin de que los diversos órganos puedan controlarse recíprocamente.

Esto significa que, como esta Corporación lo había señalado, la consagración de diversas ramas del poder y de órganos autónomos se lleva a cabo “con el propósito no sólo de buscar mayor eficiencia en el logro de los fines que le son propios, sino también, para que esas competencias así determinadas, en sus límites, se constituyeran en controles automáticos de las distintas ramas entre sí, y, para, según la afirmación clásica, defender la libertad del individuo y de la persona humana.”

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



Por ello, como lo ha recordado esta Corte, “la separación de las ramas del poder público es inherente al régimen democrático y constituye uno de sus elementos procedimentales de legitimación”. (Sentencia C- 251 del 11 de abril de 2002. M. P: Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.)

Así las cosas, y atendiendo a este principio, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, la Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función de administrar justicia y ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional, así como las autoridades administrativas, podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus actuaciones o providencias.

De igual manera, el numeral 2 del artículo 2. del Decreto 1427 de 2017 señala que dentro de las funciones del Ministerio De Justicia y del Derecho, se encuentra la función de Coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público y los organismos de control para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho, sin que ello implique atribuciones frente a las decisiones tomadas por la rama judicial en los asuntos asignados por mandato constitucional y legal para que sean tramitadas por esta misma.

Por lo tanto, no le corresponde a esta Entidad, en el marco de sus competencias, definir la situación jurídica de los bienes afectados en los trámites de extinción del derecho de dominio, toda vez que, en el caso concreto, por mandato legal, le corresponde a los Jueces de la República o excepcionalmente podrá dirimir la fiscalía la suerte de los bienes en decisiones de archivo como la señalada en estas actuaciones.

El aspecto fundamental para establecer si realmente es la tutela el mecanismo apropiado para buscar la protección, es lo que lleva al Ministerio de Justicia y del Derecho a considerar que la crítica así presentada por la solicitante no puede prosperar cuando hábilmente utiliza a su hijo menor en condición de discapacidad como escudo ante la justicia olvidando que precisamente su falta de cuidado y de atención con su hogar y con la destinación de su vivienda fue lo que generó la sanción del estado al despojarla del inmueble.

Debemos nuevamente recordar que:

No puede prosperar la petición vía tutela porque el argumento esbozado respecto a la protección del mínimo vital de un menor afectado con una discapacidad no es suficiente por sé para impedir la acción del estado y la extinción del derecho de dominio.

De predicarse con vocación de éxito una causal como la alegada sería prácticamente crear una excepción legal al trámite de extinción de dominio cuando se probó a lo largo de las actuaciones que existía una inferencia razonable en el conocimiento y en la obligación que tenía la señora madre para conocer lo que sucedía al interior de su hogar. Esa obligación no es otra cosa que el desarrollo constitucional de la figura de un núcleo familiar y la intención de protegerse entre los miembros y exigirles no solo una

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



convivencia sino una interacción e incluso una vigilancia para con los menores, no es entendible que se descuiden los asuntos al interior de un hogar que tienen que ver nada menos que con la manipulación de una importante cantidad de droga que era fácilmente percibible por los sentidos de la vista e incluso del olfato además del comportamiento que fue adquiriendo su menor hijo consecuente con el consumo o incluso la comercialización de ese al hijo.

La tutela si bien al igual que el derecho de amparo mexicano y de seguridad brasilera buscan proteger derechos de mayor importancia, pero no se puede alcanzar esa protección de cualquier manera ni convirtiendo la tutela en una instancia de revisión o control de legalidad entre otras figuras pues, generaría una inseguridad jurídica al existir siempre la amenaza de la tutela para atacar cualquier decisión.

La acción de tutela por su naturaleza es residual, subsidiaria y en ningún evento puede catalogarse como una acción de revisión y si en eventos como el que nos ocupa, las formas procesales se han respetado y el derecho sustancial se ha agotado la utilización de la tutela, se podría mostrar incluso como temeraria.

La improcedencia de la tutela no está desconociendo ni burlando la condición de especial protección de su hijo que por supuesto ya lo ha definido la corte constitucional al referirse a los mecanismos de protección de algún sector poblacional o incluso individual generando un blindaje para no sufrir las consecuencias de un proceso como el de extinción de dominio. Su condición especial es curiosamente una circunstancia que podría ser valorada en contra de la accionante pues recordemos que la obligación de controlar lo que pasa al interior de su vivienda, es aún más cuando existe en ese núcleo familiar una persona con discapacidad, el celo y el cuidado de la progenitora tenía que ser óptimo así fuera en los pocos instantes que durara su permanencia en el hogar, es decir, no podría tenerse como argumento válido que sus jornadas laborales eran extensas y eso la alejaba del hogar.

Significa lo anterior que en esos pequeños lazos de tiempo tenía que verificarse por parte de ella lo que sucedía, las visitas que allí se recibían, los alijos que allí se dejaban y todas las circunstancias al interior del inmueble, pues se trataba nada menos que de su hogar y las consecuencias de ese descuido es precisamente el castigo del Estado mediante la pérdida de su titularidad. Pareciera a simple vista un castigo máximo, pero ello obedece entre otras razones a una política estatal que desde el gobierno nacional se ha venido implementando en aras de reducir el micro tráfico en las calles de las principales ciudades, castigando a aquellos que utilizan, prestan o toleran la comercialización o el consumo de sustancias tóxicas prohibidas.

PETICIÓN.

Por las razones de hecho y de derecho aducidas en este escrito, se solicita de manera respetuosa al despacho negar el amparo constitucional deprecado teniendo en cuenta que por la acción u omisión de esta Cartera no se afectó ningún derecho fundamental de la parte accionante.

Así mismo y como quiera que el Ministerio de Justicia y del Derecho, actúa en los trámites de extinción en representación del interés jurídico de la Nación y en representación del ente responsable de la administración de los bienes afectados en el curso de esos procedimientos de extinción de dominio, no es el competente para cumplir

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



con las pretensiones en el sentido de ordenar a la fiscalía una mayor celeridad al trámite de entrega del bien.

ANEXOS.

Copia de la Resolución 0376 del 07 de junio de 2012.
Copia de la Resolución 0063 del 18 de enero de 2021.

NOTIFICACIONES.

El Ministerio de Justicia y del Derecho recibirá las notificaciones en la Carrera 53 No.13 - 27 de la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co.

Cordialmente,

JORGE LUIS LUBO SPROCKEL

Director Jurídico

Elaboró: Eduardo Castillo González

Revisó: María Cristina Gutiérrez Moreno

Aprobó: Jorge Luis lubo

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:
JORGE LUIS LUBO SPROCKEL
Director Jurídico del Ministerio de Justicia y
del Derecho
Fecha: 2021.11.25 12:19:23 -05:00

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



JORGE LUIS LUBO SPROCKEL

Director Jurídico
Dirección Jurídica

<https://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb?rad=OMqKwMDVp0yyaXTApRNwpDS%2F0sACkNJ8P458OM%2Bx0pE%3D&cod=PrwPTlw9W6rnMKhG1ywBHw%3D%3D>

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co